

L. de la R. O. del Uruguay 23-1899.

*Tratado General de Arbitraje con
la República Oriental del Uruguay.
1899.*

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay animados del común deseo de solucionar por medios amistosos cualquier cuestión que pudiera suscitarse entre ambos países, han resuelto celebrar un tratado general de arbitraje á cuyo efecto nombran como sus Plenipotenciarios, á saber:

El Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina á su Ministro Secretario en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, Doctor Don Amancio Alcorta; y

El Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay á su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Argentina, Doctor Don Gonzalo Ramírez,

Quienes, una vez comunicados sus Plenos Poderes que fueron hallados en buena y debida

forma, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo 1°

Las Altas Partes Contratantes se obligan á someter á juicio arbitral, todas las controversias, de cualquier naturaleza, que por cualquier causa surgieren entre ellas, en cuanto no afecten á los preceptos de la Constitución de uno ú otro país y siempre que no puedan ser solucionadas mediante negociaciones directas.

Artículo 2°

No pueden renovarse, en virtud de este tratado, las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre las partes. En tales casos, el arbitraje se limitará exclusivamente á las cuestiones que se susciten sobre validez, interpretación y cumplimiento de dichos arreglos.

Artículo 3°

En cada caso ocurrente se constituirá el tribunal arbitral que deba resolver la controversia suscitada.

Si no hubiera conformidad en la constitución del tribunal, éste se compondrá de tres jueces. Cada Estado nombrará un árbitro y estos designarán el tercero. Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esa designación, la hará el Jefe de un tercer Estado que indicarán los árbitros nombrados por las partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, se solicitará su designación del Presidente de la República Francesa. El árbitro así elegido será de derecho Presidente del Tribunal.

No podrá nombrarse árbitro tercero a la persona que en ese carácter haya sentenciado ya en

un juicio arbitral, con arreglo á este tratado.

Artículo 4°

Ninguno de los árbitros podrá ser ciudadano de los Estados Contratantes, ni domiciliado en su territorio. Tampoco podrá tener interés en las cuestiones que sean objeto del arbitraje.

Artículo 5°

En caso de no aceptación, renuncia ó impedimento sobreviniente de uno ó mas de los árbitros, se proveerá á su substitución por el mismo procedimiento adoptado para su nombramiento.

Artículo 6°

Los puntos comprometidos se fijarán por los Estados Contratantes que podrán tambien determinar la amplitud de los poderes de los árbitros y cualquier otra circunstancia relativa al procedimiento.

Artículo 7°

En defecto de estipulaciones especiales entre las partes, corresponde al tribunal designar la época y el lugar de sus sesiones fuera del territorio de los Estados Contratantes, elegir el idioma que deberá emplearse, determinar los métodos de sustanciación, las formalidades y términos que se prescribirán a las partes, los procedimientos a seguirse, y en general, tomar todas las medidas que sean necesarias para su propio funcionamiento y resolver todas las dificultades procesales que pudiesen surgir en el curso del debate.

Los compromitentes se obligan a poner a disposición de los árbitros todos los medios de información que de ellos dependan.

Artículo 8°

Cada una de las partes podrá constituir

una ó mas mandatarios que la represente ante el Tribunal Arbitral.

Artículo 9.

El Tribunal es competente para decidir sobre la regularidad de su propia constitución, validez del compromiso y su interpretación. Le es igualmente para resolver las controversias que surjan entre los compromitentes sobre si determinadas cuestiones han sido ó no puntos sometidos á la jurisdicción arbitral, en la escritura de compromiso.

Artículo 10.

El Tribunal deberá decidir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, á menos que el compromiso imponga la aplicación de reglas especiales ó autorice á los árbitros á decidir como amigables compondores.

Artículo 11.

No podrá formarse Tribunal sin la concurrencia de los tres árbitros. En el caso que la minoría, debidamente citada, no quisiere asistir á las deliberaciones ó á otros actos del proceso, se formará Tribunal con solo la mayoría de los árbitros, habiéndose constado la inasistencia voluntaria é injustificada de la minoría.

Se tendrá como sentencia lo que resuelva la mayoría de los árbitros, pero si el árbitro tercero no aceptase el parecer de ninguno de los árbitros nombrados por las partes, su dictamen será cosa juzgada.

Artículo 12.

La sentencia deberá decidir definitivamente cada punto en litigio y con expresión de sus fundamentos.

Será redactada en doble original y firmada

da por todos los árbitros. Si alguno de ellos se negase á suscribiria, los otros deberán hacer mención en acta especial de esta circunstancia y la sentencia producirá efectos siempre que esté firmada por la mayoría de los árbitros. El árbitro en disidencia se limitará a hacer constar su discordia in el acto de firmar la sentencia y sin expresión de sus fundamentos.

Artículo 13.

La sentencia deberá ser notificada á cada una de las partes por medio de su representante ante el Tribunal.

Artículo 14.

La sentencia legalmente pronunciada decide dentro de los límites de su alcance la contienda entre las partes.

Artículo 15.

El Tribunal establecerá en la sentencia el plazo dentro del cual debe ser ejecutada siendo competente para decidir las cuestiones que pueden surgir con motivo de la ejecución de la misma.

Artículo 16.

La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las naciones signatarias de este pacto.

Sin embargo, se admitirá el recurso de revisión ante el mismo Tribunal que la pronunció, siempre que se deduzca antes de vencido el plazo señalado para su ejecución, en los siguientes casos:

Primero. Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.

Segundo. Si la sentencia ha sido en todo o en parte la consecuencia de un error de hecho,

que resulte de las actuaciones ó documentos de la causa.

Artículo 17.

Cada una de las partes pagará los gastos propios y la mitad de los gastos generales del Tribunal Arbitral.


Artículo 18.

El presente tratado estará en vigor durante diez años, á contar desde el caye de las ratificaciones. Si no fuese denunciado seis meses antes de su vencimiento, se tendrá por renovado por otro periodo de diez años y así sucesivamente.

El presente tratado será ratificado y cayeradas sus ratificaciones en Buenos Aires, dentro de seis meses de su fecha.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la

República Argentina y de la República Oriental
del Uruguay firmaron y sellaron con sus re-
pectivos sellos, y por duplicado, el presente Es-
tado, en la ciudad de Buenos Aires, a los ocho
días del mes de junio del año de mil ocho-
cientos noventa y nueve.


Juanin Riquelme

Gonzalo Ramírez

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, junio 8 de 1899.

Aprobado. Se remite a la consideración del
Honorable Congreso.

Julio A. Roca

A. Riquelme